

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de mayo de 1984.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

19079 *ORDEN de 1 de junio de 1984 por la que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 165/1980.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido en única instancia ante la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de una, como demandante, don Esteban Escribano Garcés, representado por el Procurador don Alberto Carrilón Pardo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, se ha dictado sentencia con fecha 10 de febrero de 1984, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos rechazar y rechazamos las causas de inadmisibilidad opuestas por la Administración demandada y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del recurso de alzada dictada con fecha 10 de diciembre de 1979, en el expediente de reintegro del interesado por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, sin hacer imposición expresa de las costas causadas en este proceso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, este Ministerio ha acordado que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1984.—P. S., el Subsecretario Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

19080 *ORDEN de 1 de junio de 1984 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso número 35.730, interpuesto por don Gerardo Luis Pérez-Castaño.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 35.730, seguido en grado de apelación, entre la Administración General, defendida y representada por el Abogado del Estado, como demandada-apelante, y don Gerardo Luis Pérez Castaño, mayor de edad, casado, jubilado, vecino de Sevilla, calle Padre Medavilla (Residencia de Pensionistas de la Seguridad Social), representado por el Procurador don Luis Pulgar Arroyo y defendido por el Letrado don Leopoldo Torres Boursault, como demandante-apelado, en impugnación de la sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 8 de junio de 1981, que anuló los acuerdos del Ministerio de Justicia que denegaron al demandante la aplicación y efectos del Real Decreto-ley 44/1978, se ha dictado sentencia por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en fecha 28 de febrero del presente año, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que, rechazando la inadmisibilidad de la apelación por la parte apelada, desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en 8 de junio de 1981, cuyo fallo se transcribe en el primer resultado de esta, el que confirmamos en todas sus partes; sin imposición de las costas; causadas en este proceso en ambas instancias.

Así por esta nuestra sentencia, cuyo testimonio, por los autos originales de primera instancia y expediente administrativo, se remitirá a la Sala de procedencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1984.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

19081 *ORDEN de 4 de junio de 1984 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso contencioso-administrativo número 794/82, interpuesto por don Francisco García Domínguez.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 794/82, interpuesto por don Francisco García Domínguez, Agente de la Administración de Justicia, representado y defendido por sí mismo y seguido con la Administración General del Estado, defendido por el Abogado del Estado, contra la denegación por silencio administrativo por parte del Ministerio de Justicia a efectos del recurrente de 23 de noviembre de 1981 y 29 de marzo de 1982, sobre actualización de trienios como Agente Judicial, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña, con fecha 3 de mayo de 1984, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco García Domínguez contra la desestimación presunta por el Ministerio de Justicia de su petición formulada en escrito de 23 de noviembre de 1981 y reiterada con denuncia de mora en 29 de marzo de 1982 sobre cuantía de trienios, declaramos la nulidad de tal acto como contrario al ordenamiento jurídico, así como el derecho del recurrente que en el régimen retributivo vigente en los años 1978 y 1979 los trienios completados en el extinguido Cuerpo de Agentes de Justicia Municipal le fueran abonados en función del índice de proporcionalidad 4 y condenamos a la Administración a que le abone la diferencia, prohibida de menos en los años 1978 y 1979, entre lo correspondiente a los trienios por índice 4 y por índice 3 por todos los trienios completados en el referido Cuerpo; sin imposición de las costas.

Firma que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, juntamente con certificación y comunicación.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1984.—P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador,

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

19082 *ORDEN de 11 de junio de 1984 por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de Madrid en recurs. de impugnación de honorarios interpuesto por don Rafael García-Valdecasas Butrón, Registrador de la Propiedad de Algeciras, contra la Resolución de este centro directivo de 30 de junio de 1978.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 10 de febrero de 1983 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de Madrid en recurso contencioso-administrativo número 21.653, interpuesto por don Rafael García-Valdecasas Butrón, Registrador de la Propiedad de Algeciras, contra la Resolución de esa Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de junio de 1978, relativa a impugnación de honorarios;

Resultando que la citada Audiencia Nacional se ha pronunciado sobre la cuestión debatida en los términos que se expresan en la parte dispositiva;

Considerando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105.1, a, de la Ley de 27 de diciembre de 1956;

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado señor Sánchez Zubizarreta, en nombre y representación del demandante don Rafael García-Valdecasas Butrón, frente a la demandada Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de junio de 1978 al que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos ser conformes a derecho, y por consiguiente mantenemos el acto administrativo anteriormente dicho; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional.»

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de junio de 1984.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.